

**LA DOCTRINA BUSH:
ALGUNAS IMPLICACIONES PARA
EL NUEVO ORDEN PANAMERICANO**

Por: Luis Suárez Salazar*

II Conferencia de Estudios Americanos
“Las Américas en el nuevo contexto internacional”
La Habana, 12 al 14 de noviembre del 2003

Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del autor

* Dr. en Ciencias Sociológicas. Escritor e investigador cubano en el campo de la sociología, la historia, las ciencias políticas y jurídicas. Integrante de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC), de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), de la Asociación de Estudios del Caribe (AEC) y de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC). En la actualidad es escritor independiente y Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de la Habana, Cuba. E mail: tanialuis@cubarte.cult.cu

INTRODUCCIÓN

El objetivo de las páginas que siguen es presentar algunas tesis e hipótesis acerca de las implicaciones que pudieran tener para el sistema internacional y para el subsistema interamericano de la denominada “era posterior a la posguerra fría” (Lieber, 2002)¹ la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dada a conocer públicamente por el presidente de ese país, George W. Bush, el 20 de septiembre del año 2002 (Bush, 2002). O sea, exactamente un año después que el propio mandatario anunció —en su primer discurso ante el Congreso estadounidense luego de los fatídicos atentados contra el Pentágono y contra el World Trade Center de Nueva York (WTC) del 11 de septiembre del 2001— el inicio de una multifacética y prolongada guerra contra el denominado “terrorismo de alcance global” (Bush: 2001).²

Para cumplir mis objetivos dividiré la exposición en dos acápites. En el primero, presentaré una apretada exégesis de los contenidos más generales de la estratagema estadounidense antes mencionada. Apoyado en los textos de la misma y en las evidencias empíricas hasta ahora acumuladas, en el segundo, me referiré de manera somera a las negativas incidencias que la también denominada Doctrina Bush (Lieber, 2002; Schlesinger Jr, 2003) ya ha tenido y en el futuro previsible pudiera tener para la paz y la seguridad internacionales, para el Derecho Internacional Público Contemporáneo y para la institucionalización de lo que, desde 1995, he venido denominando un Nuevo Orden Panamericano (Suárez Salazar, 1995, 2000 y 2001).

Es decir, para el entramado de pactos y acuerdos vinculantes y no vinculantes en diferentes campos del funcionamiento de los sistemas jurídico-políticos, de la administración de la justicia, de la economía, de la educación, de la ciencia y la cultura, al igual que de la seguridad y la institucionalidad hemisférica que —bajo la égida estadounidense y sin el menor conocimiento de la opinión pública internacional— se han signado entre los 34 estados integrantes (con la exclusión de Cuba) del mal denominado Hemisferio Occidental desde la brutal intervención militar norteamericana en Panamá (diciembre de 1989) hasta nuestros días.³

¹ Aunque en lo personal tengo muchas dudas respecto a la legitimidad de esa expresión, la utilizo tal y como lo hace el politólogo estadounidense Robert J. Lieber en su artículo “Comienza nueva era en el pensamiento estratégico de Estados Unidos”, publicado en el año 2002 y cuya referencia completa se indicará en la bibliografía que aparece al final de mi ensayo. Siguiendo el sistema de referencias anglosajonas en el texto solo aparecerá(n) el (los) apellido(s) del autor, seguido —después de una coma— por el año de la publicación. Cuando —antecedida por dos puntos— aparezca una o más cifras, esta(s) se corresponden con el(los) número(s) de la(s) página(s) de la referencia indicada.

² Una traducción al español de ese maniqueo y amenazador discurso puede encontrarse en: Narciso Isa Conde, 2002: 74-85.

³ En términos geográficos el Hemisferio Occidental —delimitado por el meridiano 0— se extiende hasta importantes naciones de la costa occidental de los continentes africano y euroasiático. Sin embargo, el discurso difundido por las clases dominantes de los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe ha reducido la definición de ese hemisferio solamente a las naciones y territorios ubicados en el continente americano. Para una valoración de la historia y las implicaciones ideológicas de esa reducción puede consultarse Gordon Connell-Smith, 1976.

Incluidos los acuerdos de las tres Cumbres de las Américas que hasta ahora se han efectuado (Miami, 1994; Santiago de Chile, 1998; y Québec, 2001); de la descolorida Cumbre para el Desarrollo Sostenible realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1996; y de las centenares de reuniones políticas y técnicas panamericanas que se han efectuado desde 1991 hasta la actualidad. Entre ellas, las diversas Asambleas Generales de la Organización de Estados Americanos (OEA) en que se le ha dado seguimiento a los acuerdos de los convites antes mencionados, al igual que las múltiples reuniones dirigidas a institucionalizar, antes del 2005, el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), así como a elaborar un nuevo pacto de seguridad hemisférica, sucedáneo del desprestigiado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) de 1947.⁴

A modo de conclusión, resumiré mis principales consideraciones acerca de las implicaciones de la Doctrina Bush para el proceso de negociación del ALCA, para los procesos de integración que en la actualidad se están desarrollando en América Latina y Caribe, así como para diversas naciones latinoamericanas y caribeñas. En especial, para aquellos gobiernos (como el de Cuba y el de la República Bolivariana de Venezuela) y fuerzas políticas, sociales e intelectuales de la región interesadas –junto a sus congéneres de otras partes del mundo— en edificar un modelo de desarrollo económico, social, político y ecológico alternativo al capitalismo dependiente, económicamente “neoliberal” y políticamente “neoconservador” entronizado en la mayor parte de las naciones de los ahora denominados “segundo, tercero y cuarto mundos”.⁵

LA “DOCTRINA BUSH”: UNA EXÉGESIS.

Como está indicado, el 20 de septiembre del año 2002, dándole continuidad a los proyectos de la otrora llamada “nueva derecha norteamericana” (Blanco, 1986: 6-50), así como a sus discursos y acciones anteriores y posteriores al 11 de septiembre del año precedente (en particular, a la brutal intervención militar en Afganistán y al frustrado intento de derrocar, en abril del 2002, al gobierno

⁴ Como veremos en el texto, siguiendo los acuerdos de la Cumbre de Québec, la XXXII Asamblea General de la OEA (Barbados, junio del 2002) ratificó la celebración de una Conferencia Especial de Seguridad en las Américas. Esta se realizará en México en octubre del 2003. Por su parte, la XXXIII Asamblea General de la propia organización (Chile, junio del 2003) acordó efectuar a fines del propio año, también en México, una Cumbre Extraordinaria de las Américas dirigida a reflexionar sobre los problemas de la pobreza y la gobernabilidad. En el momento de redactar este trabajo no he podido esclarecer la forma en que se articularán entre sí las resoluciones de las dos conferencias antes mencionadas.

⁵ Como indico en uno de mis más recientes libros (Suárez Salazar, 2000), en aras de facilitar la comunicación con los lectores, operacionalmente defino como “el cuarto mundo” a los más de 50 estados del planeta que la ONU eufemísticamente denomina “países de menor desarrollo relativo” o, en inglés, *less development countries*. A su vez, defino como integrantes del “tercer mundo”, a los países que el propio organismo internacional sigue denominando “países en vías de desarrollo”. En consecuencia, dejo la expresión “segundo mundo” para los denominados “países en transición” de las “economías centralmente planificadas a las economías de libre mercado” y para los denominados “nuevos países de industrialización reciente” (NIC’s, por sus siglas en inglés). A su vez, el término “primer mundo” lo reservo para los otrora denominados “países desarrollados” o “países industrializados” que todavía conforman la absoluta mayoría de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

constitucional de la República Bolivariana de Venezuela),⁶ George W. Bush presentó oficialmente ante el Congreso de los Estados Unidos la misión, la visión, los objetivos y las estrategias que –a su decir— deberán guiar las políticas interna, económica, externa (incluida la llamada “diplomacia pública” o propaganda política exterior), militar y de seguridad de su país en lo que se alcanza a ver del siglo XXI. El elemento presuntamente unificador de esa “gran estrategia”⁷ es la llamada “guerra preventiva” (también conocida con el eufemismo de “autodefensa anticipatoria”) contra “el terrorismo de alcance global”; entendiendo “el terrorismo” como “la violencia por motivos políticos contra seres [humanos] inocentes” (Bush, 2002: 5).⁸

Sin embargo, con independencia de su retórica sobre ese último tema, así como acerca de que los Estados Unidos no utilizará su fuerza militar, ni su influencia económica y política “para obtener ventajas unilaterales”, sino para edificar junto a las otras potencias “un equilibrio de fuerzas favorable a la libertad”, a las “relaciones pacíficas con otros países”, a las “reformas económicas y políticas” y al “respeto por la dignidad humana” (Bush, 2002:1), puede afirmarse que –acorde con la tradicional práctica imperialista de los círculos de poder estadounidenses (Suárez Salazar, 1998 y 2000; Borón, 2002)— el concepto esencial que guía la introducción y los ocho acápites de esa doctrina político-militar es la búsqueda de las vías para garantizar la consolidación de la *dominación y/o la hegemonía absoluta* de los Estados Unidos (el llamado “liderazgo estadounidense”) sobre todas las naciones del mundo.⁹ Incluidas aquellas grandes potencias en ascenso o en declive que integran o que en el futuro previsible integrarán las denominadas “tríada”, “pentarquía” o “sexágono” del poder mundial. Es decir –además de los Estados Unidos— la Unión Europea, Japón, Rusia, la República Popular China y, eventualmente, la India. Esta última catalogada por los redactores del documento

⁶ AFP: *Embajador de EEUU en Caracas celebra instauración del gobierno transitorio*, Caracas, 12 de abril del 2002. También puede consultarse: PRELA: “Afirma *Newsweek*: Estados Unidos sabía del golpe en Venezuela”, en *Granma*, La Habana, 16 de abril del 2002, p.5.

⁷ En su límite superior –señalaba Clausewitz en su famosa obra *El arte de la guerra* – “la estrategia militar”, vinculada a la fuerza física (militar) “desnuda”, linda “con la ciencia política, o más bien (...) ambas se convierten en una”.

⁸ El lector debe reparar que la definición de terrorismo mencionada en ese documento desdibuja las claras diferencias existentes entre el terrorismo (entendido como ataques armados deliberados contra la población y contra objetivos civiles) y las formas de lucha política-militar de los pueblos sometidos a diferentes formas de dominación nacional y extranjera. Este último derecho de los pueblos (que –como demuestra la historia-- en ocasiones puede ocasionar víctimas civiles inocentes) es reconocido por el Derecho Internacional Público Contemporáneo. Como se verá en la bibliografía, las páginas de ese documento, se corresponder con la traducción al español difundida por la Embajada de Colombia en Washington.

⁹ Los títulos de esos acápites son los siguientes: “Estados Unidos abogará por los anhelos de dignidad humana”; “Estados Unidos fortalecerá las alianzas para derrotar al terrorismo mundial y actuará para prevenir los ataques contra nosotros y nuestros amigos”; “Colaborar con otros para desactivar los conflictos regionales”; “Suscitar una nueva era de crecimiento económico mundial por medio del mercado libre y el comercio libre”; “Expandir el círculo del desarrollo abriendo sociedades y construyendo la infraestructura de la democracia”; “Desarrollo de programas de acción cooperativa con los otros centros principales del poder mundial”; y “Transformar las Instituciones de Seguridad Nacional de Norteamérica para enfrentar los retos y las oportunidades del Siglo XXI”.

que comentamos como una de las potenciales “grandes potencias democráticas del siglo XXI” (Bush, 2002: 7).

Para cumplir sus propósitos de dominación o hegemonía sobre todas las naciones del planeta,¹⁰ incluso sobre sus aliados más cercanos (Klepak, 2003), la Casa Blanca —además de hacer explícito los objetivos intervencionistas que seguirá en sus relaciones bilaterales con los gobiernos de cada una de las potencias arriba mencionadas— expresamente se propone fortalecer aún más el poderío militar y las inmensas capacidades policiales, de inteligencia y contrainteligencia de los Estados Unidos. A niveles tales, que le permitan poner las defensas de ese país “por encima de cualquier amenaza”; “disuadir la futura competencia militar” de otras potencias o “estados hostiles”; “derrotar decisivamente a cualquier adversario si fracasa la disuasión”; al igual que “prevenir las (nuevas) amenazas contra los intereses de los Estados Unidos, sus aliados y amigos en todo el mundo”.

Especialmente, y en mi opinión esto es otra ruptura conceptual con las estrategias de seguridad nacional precedentes,¹¹ las amenazas provenientes de las “redes oscuras de individuos que pueden traer gran caos y sufrimientos a nuestras costas por menos de lo que cuesta comprar un solo tanque [de guerra]”. Asimismo, de los gobiernos de los que denomina “estados fuera de la ley” y “estados fracasados”. Estos últimos —a decir de los redactores del documento— son aquellos en los que “la pobreza”, la fragilidad de sus instituciones y “la corrupción” los han convertido en vulnerables “a las redes de los terroristas y de los *cartels* de narcotraficantes” (Bush, 2002:1).

Sin embargo, esa pretensión de garantizar *la seguridad absoluta* del territorio, de los ciudadanos, de la infraestructura y de las propiedades estadounidenses (incluso, sus activos en el espacio cósmico) no queda circunscripta al fortalecimiento de las capacidades defensivas de ese país. Ni siquiera al despliegue del cuestionado Sistema de Defensa Antimisiles, previamente impulsado por la administración de Ronald Reagan (1981-1989) bajo el tramposo nombre de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Tampoco se limita a la preparación de las fuerzas militares estadounidenses para emprender un contraataque en legítima defensa contra los responsables de cualquier agresión a su territorio, sino que —aduciendo “un internacionalismo inconfundiblemente estadounidense” (Bush, 2002: 3) y la cacareada legalidad de ofrecer respuestas anticipadas y preventivas a eventuales “amenazas inminentes” contra su territorio— proclama el presunto deber y el supuesto derecho de los Estados Unidos de iniciar “ataques preventivos” (o sea, propinar “el primer golpe”) contra “los grupos terroristas” que —

¹⁰ Para un análisis, a partir del pensamiento de Antonio Gramsci, de las similitudes y diferenciación entre los conceptos dominación y hegemonía en las relaciones internacionales puede consultarse Ayerbe, 2001.

¹¹ Todas las estrategias de seguridad nacional de los Estados Unidos que anteceden a la actual estaban fundadas en una combinación entre la contención y la disuasión. Por tanto no incluían las llamadas “guerras preventivas”. Para esas estrategias sus principales enemigos eran otras potencias mundiales. Sin embargo, la estrategia actual considera que las principales amenazas provienen de estados débiles o de fuerzas “subestatales”, como las llamadas redes de terroristas, narcotraficantes o de “narcoterroristas”.

a su decir— actúan o reciban refugio, ayuda y financiamiento en diferentes países del mundo o contra los “estados hostiles” a los intereses, instituciones y valores estadounidenses.

En lo inmediato, según declaran sin ambages, tales ataques se emprenderán contra los que define como “un pequeño grupos de estados al margen de ley que, aunque diferentes en forma importante (sic), comparten varios atributos”. Esos atributos, serían: gobiernos o “dictadores” que “tratan brutalmente a sus pueblos y malgastan sus recursos nacionales en beneficio personal de sus mandatarios”; que “no muestran respeto por el derecho internacional, amenazan a sus vecinos y violan sin reparos los tratados internacionales de que forman parte”; que “están decididos a obtener armas de destrucción masiva, junto a otras tecnologías militares avanzadas, para usarlas como amenaza u ofensivamente para lograr los propósitos agresivos de sus regímenes”; que “auspician el terrorismo”; que “rechazan los valores humanos básicos” y, sobre todo (en mi opinión, éste es el *quid* de la cuestión), que “detestan a los Estados Unidos y todo lo que representa” (Bush, 2002: 9).¹²

Con vistas a neutralizar o aniquilar a “los dictadores” que, en la opinión de la Casa Blanca, mal gobiernan a esos “estados fuera de la ley”, a los “terroristas individuales” o a los “grupos terroristas de alcance global” que supuestamente operan desde esos u otros países, la estrategia que comentamos se propone – además de fortalecer la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y los organismos internos encargados del cumplimiento de la Ley¹³— ampliar las extraordinarias capacidades de sus fuerzas militares para simultáneamente “defender el territorio nacional”, “proteger la infraestructura y los bienes esenciales de Estados Unidos en el espacio [cósmico]” y “llevar a cabo operaciones rápidas y precisas” de “largo alcance” con el fin de “eliminar amenazas específicas a los Estados Unidos, sus aliados y amigos en todo el mundo” (Bush, 2002: 10). También para: emprender “intervenciones humanitarias” en los “estados fracasados”; intervenir en los llamados “conflictos regionales” o locales existentes o que se presenten en el futuro previsible; “ayudar” a los gobiernos inmersos en esos conflictos que se lo soliciten, y “llevar a cabo operaciones de información en teatros de operaciones distantes” (Bush, 2002:19).

¹² He subrayado esa idea, para insistir en que tal como demuestra la historia, Estados Unidos ha mantenido (y mantiene) estrechas relaciones diplomáticas y de seguridad con estados y gobiernos en los que están presentes total o parcialmente los atributos que de manera unilateral ahora les endilga a los llamados “estados fuera de la ley”. Por tanto, lo que diferencia la calificación y la eventual respuesta agresiva de la Casa Blanca frente a tales estados es su mayor o menor identificación con “los Estados Unidos y todo lo que representa”. En la actualidad, lo antes dicho se demuestra en las relaciones especiales que existen entre la administración de George W. Bush y los sectores más reaccionarios del sionismo internacional que controlan posiciones claves tanto en el gobierno estadounidense, como en el gobierno de Israel. Los interesados en profundizar en este último tema, pueden consultar: Petras, 2003.

¹³ Funcional a ese propósito fue la reciente fundación del nuevo Departamento de Seguridad Interna (en inglés: Department of Homeland Security). Este nuevo departamento integra bajo un solo mando a decenas de dependencias y agencias gubernamentales vinculadas a la seguridad interna del territorio, las fronteras marítimas y terrestres, el espacio aéreo y las propiedades estadounidenses, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Con esos y otros fines que veremos después, junto a desarrollar una nueva generación de “armamentos convencionales”, la indicada estrategia expresamente se propone utilizar todas las capacidades económicas, científicas, tecnológicas, políticas, militares (incluido sus arsenales atómicos), mediáticas y diplomáticas de esa gran potencia para: a) “ayudar a la gente de todo el mundo a aprender acerca de los Estados Unidos y comprenderlo” (Bush, 2002: 20); b) “ayudar” a los demás gobiernos que lo soliciten en sus luchas “contra los terroristas”; c) “convencer” o “presionar” a las demás potencias o estados que se resistan a subordinar sus propios intereses nacionales y de seguridad a los de los Estados Unidos; d) impedir la proliferación de armamentos de destrucción masiva fuera del control de los Estados Unidos y sus aliados; e) garantizar el funcionamiento y la expansión de sus bases y estaciones militares en todos los rincones del planeta; y f) obtener “arreglos de acceso temporal” que le posibiliten “el despliegue de las fuerzas expedicionarias” estadounidense “a gran distancia”, cuando esto resulte necesario y conveniente (Bush, 2002: 19).

A pesar de los enfoques del documento acerca de la necesidad de formar “coaliciones circunstanciales y flexibles” con otros gobiernos, de aprovechar e incrementar las capacidades de las fuerzas militares implicadas en los acuerdos de seguridad regional ya existentes (como la Organización del Atlántico Norte o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) e incluso de utilizar a su favor los mecanismos multilaterales de la ONU (entiéndase: su antidemocrático Consejo de Seguridad), la Doctrina Bush es precisa en definir al carácter preponderante que en tales alianzas, coaliciones o acciones multilaterales tiene que tener el *establishment* de la política exterior y de seguridad estadounidense. En efecto, según señalan los artífices de la estrategia de seguridad imperial que venimos comentando: “En el ejercicio de nuestro liderazgo, respetaremos los valores, juicios e intereses de nuestros amigos y socios. Pero estaremos preparados para actuar individualmente cuando lo requieran nuestros intereses y nuestras responsabilidades particulares” (Bush, 2002: 20). O sea, para actuar de manera unilateral y al margen de los organismos internacionales y pactos multilaterales existentes cada vez que así lo indique la ecuación costos-beneficios tan cara para los artífices de la proyección del poder global de los Estados Unidos (González, 1998).

Los peligros que entrañan para la paz y la seguridad internacionales los conceptos político-militares acerca de la seguridad “nacional” estadounidense antes referidos no requieren comentarios adicionales. Basta recordar las lecciones de historia. Sin embargo, es necesario acentuar que, siguiendo el legado del trío Reagan-Bush(padre)-Clinton, la más reciente estrategia político-militar de los Estados Unidos virtualmente declara como enemigos de su seguridad a todos aquellos gobiernos y a todas aquellas fuerzas sociales y políticas que no acepten los dictados de la Casa Blanca; en tanto incluye diversos componentes “no tradicionales” de la seguridad nacional otrora ausentes (o sólo marginalmente

presentes) en las doctrinas político-militares elaboradas entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la “primera guerra fría”.¹⁴

Así se expresa cuando la actual administración republicana transforma en objetivos supremos de la seguridad nacional de su país la promoción del libre comercio, la protección de la libertad de empresa y de inversión, la eliminación de los subsidios estatales (entiéndase los que no provienen de los Estados Unidos), así como la ampliación de las “apertura de los mercados” y la institucionalización de las proteccionistas cláusulas ambientales y laborales propugnadas por las principales potencias capitalistas y en especial por los Estados Unidos en las negociaciones de la llamada Ronda del Milenio que se están desarrollando en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

También, cuando la Casa Blanca proclama como metas de la gran política de seguridad de los Estados Unidos la expansión de la democracia liberal-burguesa (es decir de las poliarquías actualmente imperantes en el mundo),¹⁵ al igual que el cumplimiento de las llamadas reformas económicas de primera y segunda generación (los programas de ajuste y reestructuración “neoliberales”) impulsadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde comienzos de la década de 1990. Contra toda evidencia empírica, esas “reformas”, al igual que las indiscriminadas aperturas económicas que las han acompañado, el “libre comercio” y la libertad de las inversiones provenientes de las grandes corporaciones privadas multinacionales y transnacionales son consideradas por la estrategia que venimos comentando como condición unívoca e imprescindible para impulsar el desarrollo, eliminar la pobreza y combatir las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo) en todo el mundo.

Lo anterior se une a la reiteración del “narcotráfico sin restricciones” (Bush, 2002: 7) entre los “nuevos enemigos” de la seguridad nacional estadounidense. También a los endurecidos controles que se anuncian contra los inmigrantes y sus familias con el propósito de “contener a los terroristas fuera de las fronteras nacionales de los Estados Unidos”. Asimismo, a las onerosas condiciones de factibilidad (la medición precisa de los resultados), políticas (el “buen gobierno” y la lucha contra la corrupción), económicas (la aplicación de los Programas de Ajustes del FMI y el BM) y de seguridad (la lucha contra el “narcoterrorismo”) que esa potencia establece para transferir su “ayuda humanitaria” o para entregar sus menguados fondos de la mal llamada Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a los eufemísticamente llamados por la ONU: “países en vías de desarrollo” y “países de menor desarrollo relativo”.

¹⁴ Como han indicado algunos autores la “primera guerra fría” concluyó previo a la presidencia de James Carter (1977-1981) y la “segunda guerra fría” comenzó y terminó con las administraciones de Ronald Reagan y George H. Bush (1981-1993). Para un análisis de la historia del pensamiento político-militar estadounidense puede consultarse, entre otros autores, G. Trofimentko, 1987.

¹⁵ El término “poliarquía” fue definido por el politólogo Robert Dahl como un sistema político en el cual gobierna un pequeño grupo, y la participación de las masas en la toma de decisiones se limita a seleccionar la dirigencia en elecciones cuidadosamente manipuladas por las elites competidoras. Los interesados en ampliar en las diferencias existentes entre las poliarquías y la democracia pueden consultar Robinson, 1996.

Entre esas condiciones hay que resaltar la flamante exigencia de la Casa Blanca (recientemente puesta de manifiesto en las sanciones a treinta y cinco países del mundo) de que los gobiernos receptores o que aspiren a recibir ciertos fondos de “ayuda” oficial estadounidense, como la ayuda militar, además de cumplir con los requisitos antes mencionados, firmen acuerdos bilaterales con los Estados Unidos que le garanticen que sus “esfuerzos” por cumplir con sus “compromisos de seguridad mundiales y proteger a los estadounidenses no se verán perjudicados por el potencial de investigación, pesquisas o enjuiciamiento por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI)”, cuya jurisdicción, no aceptan, ya que –a su decir— “no se extiende a los estadounidenses” (Bush, 2002: 20).

Es decir, como parte de la realización de su estrategia de seguridad imperial los círculos dominantes en los Estados Unidos (en especial los integrantes de la otrora llamada “nueva derecha”) no sólo pretende imponer sus propias nociones sobre el desarrollo, la democracia, los derechos humanos, el buen gobierno, la lucha contra la pobreza, el “narcotráfico”, el “lavado de dinero” y otros delitos conexos, las “migraciones incontroladas” o “el narcoterrorismo”, así como lograr su dominación o hegemonía absoluta sobre las demás naciones del mundo y la seguridad absoluta de su territorio y de sus intereses, sino que también quieren obtener *la impunidad absoluta* de sus ciudadanos (en especial de sus funcionarios civiles y militares) para violar a su antojo el Derecho Internacional Humanitario (el Tratado de Ginebra de 1949 y sus protocolos adiciones de 1975) y, sobre todo, para perpetrar los *crímenes de lesa humanidad* (torturas, desapariciones forzadas, genocidios y etnocidios) que –según el Tratado de Roma de 1998— virtualmente serán los únicos delitos que, sin carácter retroactivo, conocerá, investigará, juzgará y sancionará el TPI cuando esté en condiciones de comenzar a funcionar.

Las terribles implicaciones de esa exigencia oficial estadounidense (y de sus más estrechos cómplices) para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y para el Derecho Internacional Humanitario ya se pusieron de manifiesto en los crímenes contra la población civil, contra los prisioneros de guerra y contra diversos periodistas perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses (y sus aliados británicos) durante las operaciones político-militares que (a espaldas de la ONU, incluso de su antidemocrático Consejo de Seguridad) aún se desarrollan en Afganistán y en Irak. Asimismo, en el brutal tratamiento que han recibido o están recibiendo, según el caso, los detenidos en Afganistán que guardan prisión en la mal llamada Base Militar de Guantánamo,¹⁶ los opositores a la ocupación militar de Irak, así como los inmigrantes extranjeros que –bajo los enunciados de la mal llamada *Patriotic Act* de octubre del 2001— fueron deportados o permanecen encarcelados en los Estados Unidos a pesar de que la fiscalía no ha podido demostrar su vinculación con los responsables intelectuales y materiales de los

¹⁶ La *Guantánamo Naval Base*, realmente está ubicada en las cercanías de los poblados de Caimanera y Boquerón: ambos a más de 30 kilómetros de la ciudad de Guantánamo. El nombre que le puso a esa base militar el gobierno estadounidense obedece a que la misma controla una parte (la entrada) de la Bahía de Guantánamo.

atentados terroristas contra el WTC, contra el Pentágono, ni contra el avión de United Airlines que se estrelló en el oeste de Pensilvania.¹⁷

IMPLICACIONES INTERNACIONALES DE LA “NUEVA” ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPERIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Lo antes dicho me coloca en una de las principales implicaciones que —desde mi punto de vista— tendrá la Doctrina Bush en el sistema internacional, en el Derecho Internacional Público Contemporáneo (DIPC), así como en el “orden” mundial y panamericano: El flagrante desconocimiento por parte de los actuales ocupantes de la Casa Blanca de todos aquellos tratados, organismos e instituciones jurídicas internacionales e interamericanas (incluso las ratificados por administraciones precedentes) que se opongan a sus reverdecidos afanes de dominación u hegemonía sobre todas las naciones del mundo y, en primer lugar, sobre las ubicadas en el llamado Hemisferio Occidental. En consecuencia, como se demostró en Irak, las prácticas unilaterales preponderarán sobre los enfoques multilaterales y las llamadas “coaliciones circunstanciales y flexibles” sobrepasarán las facultades y decisiones de los organismos internacionales. Sobre todo cuando estos organismos rechacen la utilización selectiva y oportunista de los mismos que en los lustros más recientes le han venido otorgando la diplomacia estadounidense (Suárez Salazar, 2000).¹⁸

Esto último se vincula con la añeja y ahora actualizada pretensión de los círculos de poder estadounidenses (y de sus más estrechos cómplices) de modificar *de jure* o *de facto* las bases mismas del DIPC. O sea, los principios de la Carta de San Francisco que en 1945 dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, vinculados a ellos, los de la Carta de Bogotá que, en 1948, fundó la Organización de Estados Americanos (OEA). En particular, todos aquellos apartados de ambos instrumentos jurídicos que establecen la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados, así como la autodeterminación de los pueblos. Igualmente, los artículos de ambas cartas que (con independencia de las violaciones posteriores) proscriben el empleo de la coacción y de la fuerza en la solución de los conflictos internacionales y, por consiguiente, propugnan la solución pacífica y negociada de tales conflictos.

Por otra parte, la institucionalización *de jure* o *de facto* de los ilegales presupuestos de las “guerras preventivas” contra las llamadas “amenazas inminentes” al territorio de los Estados Unidos y de sus aliados, modifica de manera radical todos aquellos artículos de la Carta de la ONU que establecen que únicamente se emplearán las fuerzas militares de un estado miembro contra otro

¹⁷ Como seguramente conocen los lectores de estas páginas, existe una gran cantidad de material difundido que pone en duda la versión del gobierno estadounidense acerca del atentado al Pentágono, así como acerca de las causas de la destrucción del avión de United Airlines que se estrelló en Pensilvania.

¹⁸ La práctica de utilizar de manera selectiva y oportunista a los organismos internacionales es vieja en la diplomacia estadounidense; pero se acentuó durante la década de 1990; en particular durante la administración de William Clinton: uno de los mandatarios estadounidenses que en más ocasiones utilizó las fuerzas armadas estadounidenses en operaciones unilaterales o multilaterales fuera de sus fronteras.

en el ejercicio fundamentado del derecho a la legítima defensa o en cumplimiento resoluciones expresas del Consejo de Seguridad de la ONU dirigidas a solucionar conflictos que afecten la paz y la seguridad internacionales. Una cláusula parecida quedó establecida en el mal llamado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) firmado en 1947 por los Estados Unidos y los gobiernos de los 20 países entonces independientes de América Latina y el Caribe.¹⁹ A pesar del carácter ideológico de ese acuerdo,²⁰ éste estableció que el uso de la coacción o la fuerza contra “una intervención extranjera en los asuntos internos del Hemisferio Occidental” debía de ser decidida por las dos terceras partes de los estados miembros de ese asimétrico pacto político-militar.

Todos los tratados internacionales e interamericanos antes mencionados también son desconocidos cuando el actual gobierno de los Estados Unidos —en términos que recuerdan el decimonónico “destino manifiesto” (Boff, 2003)— anuncia su intención unilateral de imponer, por la razón o por la fuerza, su “modelo” económico, político y social a otras naciones del mundo. También cuando expresa su decisión de respaldar —a través de sus programas de Ayuda Oficial al Desarrollo— a las fuerzas opositoras (nuevamente llamados “defensores de la libertad”) a los gobiernos que no comulguen con “los Estados Unidos y todo lo que representa”. Asimismo, cuando proclama su supuesto derecho a derrocar (*roll back*) a las autoridades legítimas de esos estados en el momento que la Casa Blanca lo considere oportuno y conveniente. Así lo indican los redactores del documento que venimos comentando cuando señalan: “Hoy, estos ideales [los que supuestamente encarnan el modo de vida y el sistema político estadounidense] son un sustento para los solitarios defensores de la libertad. Y, cuando se presente la oportunidad podremos fomentar el cambio, como hicimos en Europa Central y Oriental entre 1989 y 1991, o en Belgrado en el año 2000” (Bush, 2002: 4).

Sobran los comentarios acerca del desconocimiento que ello implica de los principios del DIPC que establecen la no ingerencia en los asuntos internos de los países integrantes del sistema de la ONU. Pero, con independencia de los juicios de valor respecto a cualquiera de esos gobiernos, habría que recordar que el derrocamiento (*roll back*) de las autoridades de Belgrado fue antecedida por los brutales bombardeos perpetrados por la fuerza aérea estadounidense, con el respaldo de la OTAN, y que tal precedente sirvió de base para la sangrienta invasión anglo-estadounidense contra Afganistán e Irak, así como para el derrocamiento de las autoridades de ambos países. En el primer caso con el artificio de destruir a las redes terroristas de Al'Qaeda amparadas por el gobierno talibán. Y, en el segundo, con el falso pretexto de liquidar las Armas de

¹⁹ El lector debe recordar que Canadá no es parte del TIAR. También que en el momento en que se firmó dicho acuerdo no habían obtenido su independencia los territorios coloniales de Gran Bretaña y Holanda (cual es el caso de Surinam), ubicados en el Mar Caribe.

²⁰ El carácter ideológico del TIAR quedó exhaustivamente demostrado durante la llamada “guerra de las Malvinas” que, en 1982, enfrentó a Argentina con el Reino Unido. En esa ocasión, la Casa Blanca —desconociendo sus compromisos con el TIAR— respaldó a Gran Bretaña en su reconquista a sangre y fuego de esa porción del territorio argentino, ilegalmente ocupada desde 1833.

Destrucción Masiva (ADM) que presuntamente estaba produciendo y almacenando el gobierno de Saddam Hussein (Wright, 2003; Schlesinger Jr, 2003).

A lo antes dicho habría que agregar las negativas implicaciones que están teniendo en las relaciones interamericanas la descarada ingerencia del gobierno y otras instituciones “no oficiales” de los Estados Unidos en los asuntos internos y externos venezolanos y cubanos. Sobre este último tema volveré después; pero ahora conviene precisar que las perspectivas de la situación venezolana son mucho más preocupantes porque la “nueva” estrategia de seguridad imperial de los Estados Unidos también proclamó como uno de sus objetivos el fortalecimiento de su “seguridad energética” mediante la ampliación de las “fuentes y del tipo de energía mundial que se proporciona especialmente en el Hemisferio Occidental, Asia Central y la región del Mar Caspio” (Bush, 2002:13). O sea, por parte de aquellos países del mundo (como es el caso de Canadá, México, Colombia, Ecuador...) aún alejados de los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), actualmente presidida e impulsada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

No creo necesario insistir en todo lo que se ha documentado acerca del penetrante “olor a petróleo” que acompañó a la brutal intervención militar estadounidense contra Afganistán, a los reiterados y frustrados intentos golpistas y desestabilizadores emprendidos (o en marcha) contra el presidente venezolano Hugo Chávez (Dieterich, 2003), así como el que acompaña a la persistente agresión militar anglo-estadounidense contra Irak. Pero, a los efectos de estas reflexiones, vale la pena recordar que —como demostró hace muchos años Eduardo Galeano (1979)— la “seguridad energética” de los Estados Unidos y el control por parte de los monopolios de esa potencia de las fuentes de energía y de otros recursos naturales del Hemisferio Occidental ha estado en la base de muchos de los estropicios históricamente cometidos por el *establishment* de la política exterior y de seguridad estadounidense en diversos países del América Latina; y en particular en las naciones y territorios integrantes del denominado Gran Caribe.²¹

Obviamente, algunos de esos estropicios pudieran reeditarse en el futuro inmediato. Mucho más porque, según se ha documentado, el control por parte de los Estados Unidos y de sus corporaciones transnacionales de las reservas energéticas y de otros recursos naturales (incluido los biogenéticos) de diversas naciones del Gran Caribe está en la trastienda del Plan Puebla Panamá (anunciado, luego de obtener la anuencia de la actual administración republicana, por el presidente mexicano Vicente Fox en marzo del 2001), del multimillonario

²¹ En la década de 1980, la expresión Gran Caribe fue acuñada por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) para Centroamérica y el Caribe. Siguiendo el legado de CRIES, en estas páginas utilizaré ese término para referir todas las naciones (independientes o no) del Caribe insular y continental (Belice, Guyana, Surinam y Cayena), de Centroamérica (incluida Panamá), así como a las integrantes del G-3 (México, Venezuela y Colombia). Cuando utilice la expresión Cuenca del Caribe, solo me referiré a las naciones centroamericanas y al Caribe insular y continental.

Plan Colombia (aprobado a mediados del 2000 por la administración de William Clinton) y de la denominada Iniciativa Regional Andina (o con más precisión andino-amazónica) anunciada unas semanas después de la inauguración de su mandato (20 de enero del 2001) por George W. Bush y por su flamante secretario de Estado, el ex general Colin Powell (Vargas Meza, 2001: 104-125).

La vitalidad de esa última iniciativa para la lucha contra el “narcoterrorismo” fue resaltada por el Departamento de Estado inmediatamente después del 11 de septiembre del 2001 y de las resoluciones de apoyo a la “guerra terrorista contra el terrorismo” (Grosfoguel, 2002: 133-137) aprobadas por las sucesivas reuniones extraordinarias de consulta de los cancilleres de los países integrantes de la OEA y del TIAR efectuadas en Washington el 20 de septiembre del propio año. Igualmente, durante la reunión que sostuvo el presidente George W. Bush con el presidente de México y con algunos de sus homólogos andinos y centroamericanos en marzo del 2002. Asimismo, en la XXXII Asamblea General de la OEA que, en junio del propio año, aprobó una nueva Convención Interamericana contra el Terrorismo (OEA, 2002). Por ello no es casual que esos militarizados planes de “lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo” sean refrendados por la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que venimos comentando. Esta indica (Bush, 2002: 7):

Algunas partes de América Latina se enfrentan al conflicto regional, en especial el derivado de la violencia de los *cartels* de las drogas y sus cómplices. Este conflicto y el narcotráfico sin restricciones pueden poner en peligro la salud y la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, hemos formulado una estrategia activa para ayudar a los países andinos a ajustar sus economías, hacer cumplir sus leyes, derrotar a las organizaciones terroristas y cortar el suministro de drogas, mientras tratamos de llevar a cabo la tarea, igualmente importante, de reducir la demanda de drogas en nuestro propio país.

En cuanto a Colombia, reconocemos el vínculo que existe entre el terrorismo y los grupos extremistas, que desafían la seguridad del estado, y el narcotráfico, que ayuda a financiar las operaciones de esos grupos. Actualmente estamos trabajando por ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y a derrotar a los grupos armados ilegales, tanto de izquierda como de derecha, mediante la extensión efectiva de la soberanía a todo el territorio nacional y proporcionándole seguridad básica al pueblo de Colombia.

Vale la pena resaltar que los enunciados anteriores desconocen el terrible impacto que esa “estrategia activa” ha tenido, está teniendo y seguramente tendrá en la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia.²² También la incidencia que pudiera tener la creciente intervención estadounidense

²² Existe una vasta bibliografía sobre este tema que los lectores colombianos seguramente conocen y dominan con mayor propiedad que el autor de este escrito.

en el conflicto interno colombiano en la paz y la seguridad de las naciones andino-amazónicas y de los diversos países continentales e insulares de la Cuenca del Caribe que tienen fronteras marítimas o terrestres con esa nación suramericana. Igualmente, desconocen la ineficacia de las acciones dirigidas a “cortar el suministro de drogas” provenientes del exterior para contener la creciente producción y demanda de drogas sintéticas y semi-sintéticas en los Estados Unidos y Europa Occidental (OFDPD, 2001; Suárez Salazar, 2002).

Asimismo, ignoran las críticas que se le han formulado a la política antidrogas de los Estados Unidos por llevar su guerra contra ese “flagelo” allende a sus fronteras, por menospreciar las acciones educativas y preventivas dirigidas a detener la demanda interna y por condicionar la “ayuda” oficial estadounidense a los llamados “países productores” (como Bolivia, Perú, México, Colombia o Jamaica) o “países de tránsito” (los centroamericanos o caribeños) a la militarización de la lucha contra el “narcotráfico” y a que los gobiernos de dichas naciones apliquen los Programas de Ajuste Estructural (PAE) impulsados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través del FMI y del BM (Younger, 1997; Marcella y Schulz, 1999; Vargas Meza, 2001).

Como ya vimos, el cumplimiento de estos PAE forman parte orgánica de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; particularmente de los enunciados de la misma dirigidos a promover lo que definen como el “crecimiento económico y la libertad económica más allá de las costas de los Estados Unidos” (Bush, 2002:11). Esto último debe tener un repercusión particularmente negativa en las relaciones interamericanas dadas las evidencias existentes acerca del terrible impacto socioeconómico, socioambiental y sociopolítico que tales programas han tenido y están teniendo en diferentes países de la región (cual es el caso emblemático de Argentina), así como en razón del creciente cuestionamiento hacia esos PAE que se están produciendo en diversos países latinoamericanos y caribeños. En particular, por parte de aquellas fuerzas sociales y políticas opositoras a la denominada “globalización neoliberal” y entre aquellos gobiernos (como son los de Cuba y Venezuela) que insisten en buscar caminos alternativos a las fórmulas seudo democráticas, “mercadoocráticas” y plutocráticas impulsadas por los círculos dominantes en los Estados Unidos, en consuno con los sectores hegemónicos de las clases dominantes del norte y del sur del Hemisferio Occidental.

De modo que puede afirmarse que –siguiendo los precedentes de las llamadas doctrinas de “contención al comunismo” o de la “expansión (*alargment*) de la democracia y el libre mercado”²³— tales fuerzas sociales y políticas, así como tales gobiernos (u otros con posiciones parecidas) han pasado a ser considerados

²³ Según los especialistas, la llamada doctrina de “contención al comunismo” en sus diferentes variantes unificó las diversas estrategias política-militares estadounidenses desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín y la progresiva desarticulación del campo socialista formado alrededor de la URSS. La doctrina de la “expansión (*alargment*) de la democracia y el libre mercado” fue estrenada por la administración de William Clinton (1993-2001) como sucedánea de la anterior y como antecesora de la doctrina de Seguridad Nacional a la que se refiere este artículo.

como “nuevos enemigos de la seguridad nacional estadounidense”. Mucho más porque la Doctrina Bush también indica, de manera expresa, que la promoción de la libertad de comercio e inversión (o sea lo que denomina: “los mercados libres y el libre comercio”) constituye una de “las prioridades claves” de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos” (Bush, 2002: 15).

En consecuencia, esa estratagema también incluye como uno de sus principales objetivos el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, los Estados Unidos y México), la promoción y suscripción de nuevos acuerdos de libre comercio con los naciones centroamericanas y con Chile (Bush, 2002:12), al igual que el desarrollo del “proceso de las Cumbres de las Américas”. Y, dentro del mismo, la culminación de las negociaciones del ALCA y los nuevos acuerdos en materia de la seguridad hemisférica que —como vimos— se están procesando en la actualidad. Lo anterior se desprende del siguiente enunciado del documento que comentamos (Bush, 2002: 7):

En el Hemisferio Occidental hemos establecido coaliciones flexibles con países que comparten nuestros intereses prioritarios, en especial México, Brasil, Canadá, Chile y Colombia. Juntos forjaremos un hemisferio genuinamente democrático, donde nuestra integración dé impulso a la seguridad, la prosperidad, las oportunidades y la esperanza. Trabajaremos con instituciones regionales como el proceso de la Cumbre de las Américas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Reuniones Ministeriales de Defensa de las Américas, en beneficio de todo el Hemisferio.

Esa subordinación de la “lógica del ALCA” (es decir, de la lógica de la integración económica subordinada de América Latina y el Caribe hacia los Estados Unidos) a la suprema lógica de los intereses de la seguridad imperial estadounidense también se expresa en su apartado relativo a la búsqueda de “una nueva era de crecimiento económico mundial por medio del mercado libre y el comercio libre” (Bush, 2002: 11 y siguientes). En este se indica que la Casa Blanca “presionará a favor de iniciativas regionales, tales como el ALCA”, y que —acorde con la Ley del Comercio y con la Autorización de Promoción Comercial (antes llamado *fast track*) aprobadas por el Capitolio en el 2002— garantizará que “los beneficios del libre comercio no se consigan a costa de los trabajadores estadounidenses” (Bush, 2002: 12).

En función de ello —además de vindicar como un asunto de seguridad nacional la presunta legitimidad de los subsidios y de las acciones oficiales dirigidas a proteger a los productores agrícolas y a los productores de acero estadounidenses— insiste en que la Casa Blanca incorporará a las negociaciones comerciales que se desarrollen “nuevos acuerdos y leyes comerciales contra las prácticas desleales”, para remover las “regulaciones sobre tecnología, ciencia y salud que obstaculizan innecesariamente las exportaciones agrícolas y la agricultura mejorada” (es decir para la producción y el comercio de productos transgénicos), para atender las preocupaciones auténticas acerca de los subsidios gubernamentales y el *dumping*, así como para “disuadir el espionaje industrial”.

Igualmente, las “preocupaciones ambientales y laborales” con las que los Estados Unidos y otras potencias capitalistas pretenden proteger por vías no arancelarias sus economías de la mal llamada “competencia desleal” proveniente de las naciones subdesarrolladas de todo el mundo y, en particular, de América Latina y el Caribe.

Todo lo antes dicho sería suficiente para justificar mis preocupaciones (compartidas por otras colegas) con relación al impacto negativo que tendrá la Doctrina Bush en las relaciones internacionales e interamericanas; en primer lugar, sobre los estados y gobiernos de la región (Cuba, Venezuela y diversos países del Caribe insular y continental) que han expresado más de una reserva respecto a la actual proyección mundial y hemisférica del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, a los temas abordados habría que agregar, al menos, la escasa importancia que la actual administración republicana le confiere a las naciones del llamado “Caribe insular y continental”. Estas no aparecen significadas a lo largo de la estrategia que comentamos y en la única oportunidad que aparecen mencionadas solo se refieren a las naciones de “menor desarrollo relativo” de esa subregión; las cuales son expresamente comparadas con las empobrecidas y marginadas naciones africanas colocadas al sur del Sahara (Bush, 2002:12).

De manera que puede pronosticarse que, en el futuro inmediato, se acentuará la llamada “agenda negativa” (migraciones incontroladas, narcotráfico y otros delitos conexos, como la corrupción, el lavado de dinero y “el terrorismo”) de las relaciones entre los Estados Unidos y la mayor parte de las naciones del Gran Caribe. Mucho más porque —como ya vimos— la estratagema que comentamos subordina la complicada agenda política, económica, social y ambiental de esa subregión (incluida la necesaria lucha contra el VIH/SIDA, así como contra las acrecentadas amenazas naturales y los desastres sociales típicos de esa región) a la agenda de seguridad de los Estados Unidos (Suárez Salazar, 2003; Griffith, 2003). Y porque es de esperar que —sobre la base de sus enunciados acerca de la importancia que tienen para esa potencia multidimensional la preservación de sus facilidades y acuerdos militares en todo el mundo— continúen las presiones estadounidenses para mantener y consolidar los dispositivos de ese carácter que ya existen en Puerto Rico, en la bahía de Guantánamo, en Aruba, Curazao, Honduras y El Salvador, así como por extender esos dispositivos a la “desmilitarizada” Costa Rica. Como se conoce, en ese último país se pretende instalar una Academia Interamericana de Policía, subsidiaria de la célebre Academia Internacional de igual carácter que funciona en Washington.

Esas instalaciones militares y policiales se unirán a la base militar de Manta, Ecuador; de Iquito, en Perú; así como a los múltiples radares e instalaciones militares (operadas en consuno con sus fuerzas armadas) que se han venido instalando en Colombia (García Muñoz y Rodríguez Beruff, 1999). Igualmente, a las denominadas “intervenciones militares de baja intensidad” que de manera más o menos sibilina y con el pretexto de realizar diversas acciones cívico-militares han venido ejecutando las fuerzas militares del ahora todo poderoso Comando Sur de

los Estados Unidos en Argentina, Panamá y en República Dominicana: país que – junto a su vecino Haití— es considerado por la Casa Blanca como uno de los principales “corredores de drogas ilegales” hacia el mercado estadounidense.

Como se ha documentado, todo ese dispositivo militar (al igual que el recién formado Comando Norte, con jurisdicción sobre Canadá, los Estados Unidos, México, Puerto Rico y Cuba) se enfila a contener, disuadir o derrotar (donde quiera que sea posible y necesario) cualquier proyecto alternativo a los excluyentes sistemas políticos instauradas en la mayoría de los países de la región (Isa Conde, 2002 y 2003). Tales sistemas políticos –identificados con las nociones más excluyentes y conservadoras de las democracias representativas— fueron canonizadas por la XXI Asamblea General de la OEA efectuada en Santiago de Chile en junio de 1991, por el Protocolo de Washington de 1992 (ratificado en 1997) y por la Carta Democráticas Interamericana aprobada por la XXXI Asamblea General de la OEA efectuada en Lima, Perú, el 10 de septiembre del año 2001.

Cual ya lo ha venido haciendo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y como recientemente intentó, otra vez, en el Consejo Permanente de la OEA,²⁴ ese último instrumento jurídico –al igual que otros enunciados de la Doctrina Bush— seguramente serán aprovechadas por la actual administración republicana con vistas a intentar obtener, al igual que en la década de 1960 (Suárez Salazar, 1986), la solidaridad panamericana en sus múltiples y hasta ahora frustrados intentos por derrotar el “mal ejemplo cubano”. Mucho más si finalmente, los sectores más reaccionarios del Departamento de Estado y del Pentágono (unido a sus más estrechos aliados en la región) lograran tipificar ante la opinión pública interna, hemisférica e internacional al gobierno de la mayor de las Antillas como uno de “los estados fuera de la ley”, promotores o cómplices del “terrorismo de alcance global”.

Según ha denunciado reiteradamente el gobierno cubano, en esa dirección apuntan las constantes mentiras difundidas por el reaccionario ex subsecretario de Estado para asuntos interamericanos y ahora enviado especial del presidente George Bush para América Latina y el Caribe, Otto Reich, así como por otros altos funcionarios civiles del Pentágono acerca de que Cuba estaría produciendo productos biotecnológicos que podrían ser utilizados como armas biológicas por algunos “estados hostiles” (como Irán) o por grupos terroristas de alcance global. En la misma dirección apuntan las falacias de la Casa Blanca acerca de que el gobierno cubano no ha colaborado, ni colabora suficientemente con los Estados Unidos en su “lucha contra el terrorismo”.

²⁴ En mayo del 2003, de manera infructuosa el Departamento de Estado intento sentar al gobierno de Cuba en el banquillo de los acusados de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el pretexto de que éste viola las estipulaciones de la Carta Democrática Interamericana signada –a instancias de la Tercera Cumbre de las Américas (Québec, abril del 2001) y sin la presencia de Cuba— por todos los gobiernos integrantes de la OEA el 10 septiembre de ese último año.

Entre otros infundios, lo anterior fundamenta la decisión del Departamento de Estado de mantener a Cuba en la lista de estados terroristas. Igualmente, las acciones que (con el reiterado apoyo del gobierno estadounidense) han venido realizando el reaccionario *lobby* anti cubano en los Estados Unidos, juntos a sus agentes y mercenarios en Miami y en Cuba (Pérez Roque, 2003), con vistas a crear diversas situaciones críticas en las relaciones entre ambos países que pudieran fundamentar ante la opinión pública el criterio de que el “régimen cubano” constituye una amenaza, más o menos tradicional, más o menos inminente para la seguridad nacional estadounidense.

De más está decir que —como en otras ocasiones históricas— el incremento de las tensiones entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba (y, en caso extremo: una eventual agresión militar estadounidense contra esa isla) tendría una incidencia particularmente adversa en la paz, la seguridad y en la llamada “gobernabilidad democrática” de diversos países latinoamericanos, en particular en las naciones del Gran Caribe: región sobre la que históricamente ha tenido una significativa gravitación el conflicto existente desde comienzos del siglo XIX entre la entonces naciente nación cubana y todos los que en los Estados Unidos han aspirado a la anexión o a la subordinación de la mayor de las Antillas a las necesidades geoeconómicas o geopolíticas de los círculos de poder estadounidenses.²⁵

A MODO DE CONCLUSIONES

Todos los elementos antes señalados y otros excluidos en aras de la síntesis permiten afirmar que la llamada Doctrina Bush constituye una evidente amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Igualmente, para las bases del DIPC y de lo mejor del derecho interamericano. Asimismo, es un peligro para todos aquellos estados y gobiernos del mundo (incluidas las restantes potencias) y para todas las instituciones y organismos internacionales y regionales que, en uno u otro momento, sean percibidos por los círculos dominantes de los Estados Unidos como obstáculos a sus reverdecidas pretensiones de ejercer su dominación o su hegemonía absoluta sobre el sistema internacional supuestamente surgido de las cenizas de los atentados terroristas contra el WTC y el Pentágono del 11 de septiembre del 2001.

Aunque en lo personal no coincido con esa última afirmación (en última instancia esos hechos no modificaron la estructura del sistema internacional de la “posguerra fría”), ya está verificado que las “negligencias” de los aparatos de seguridad de los Estados Unidos que propiciaron estos últimos acontecimientos le

²⁵ El lector debe recordar que el primer conflicto que alrededor de la independencia de Cuba se produjo entre las naciones independientes del ahora denominado Gran Caribe y los Estados Unidos fue durante el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el Libertador Simón Bolívar en 1826. En esa ocasión los entonces ocupantes de la Casa Blanca se opusieron tenazmente a los proyectos de México y de la Gran Colombia de organizar una fuerza expedicionaria que contribuyera a la liberación de Cuba y Puerto Rico del dominio colonial español. Tal postura estadounidense se fundamentó en el criterio de que Cuba y Puerto Rico eran “apéndices naturales” del territorio de los Estados Unidos.

ofrecieron a los sectores más reaccionarios de los círculos de poder estadounidenses que ocuparon la Casa Blanca luego del fraude electoral y del golpe de estado judicial pro republicano de noviembre-diciembre del 2000, la oportunidad de llevar a la práctica su Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) difundido a partir de junio de 1997 (Burch, 2003). Según ha trascendido, en razón de las debilidades relativas de la socioeconomía estadounidense frente a la Unión Europea y, en menor medida, frente a Japón, ese proyecto privilegia el empleo del poder político-militar de los Estados Unidos para resolver a su favor las contradicciones que existen o que en el futuro previsible se presenten con las potencias integrantes de la tríada, la pentarquía o el sexágono del poder mundial, al igual que con otros estados y gobiernos de los llamados “países del segundo, tercer y cuarto mundos”.

Desde mi punto de vista, lo anterior confirma las tesis de todos los que hemos insistido en interpretar en forma anti dogmática y creadora la actual etapa de la “globalización” desde los marcos teóricos-metodológicos del marxismo y, en particular, de lo que en un trabajo publicado en 1980, Juan G. Tokatlian denominó “la teoría del imperialismo” y “la llamada teoría de la dependencia”. Obviamente, incluyendo, sin reduccionismos de ningún tipo, dentro de ambas teorías lo que desde comienzos del siglo XX, Vladimir Ilich Lenin denominó (para burlar la censura zarista) como “los cinco rasgos económicos” del capitalismo monopolista de Estado, la ley absoluta del “desarrollo desigual y combinado del capitalismo” y las recurrentes e insuperables “contradicciones ínter imperialistas” (Lenin, 1917).

Sin negar los cambios en sus contenidos y en sus formas de expresión, esos rasgos, esas leyes y esas contradicciones ínter imperialistas aún subsisten.²⁶ En tal magnitud que —como se demostró antes, durante e inmediatamente después de la agresión anglo-estadounidense contra Irak— al menos momentáneamente paralizaron el funcionamiento de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y del Consejo de Seguridad de la ONU. También pusieron en evidencias las incoherencias que acompañan la profundización y, sobre todo, la programada ampliación hacia el Este y el Sur de las actuales fronteras de la Unión Europea. Asimismo, reiteraron la incapacidad de ese “gigante económico” de elaborar una Política Exterior y Seguridad Común autónoma frente a los intereses “atlantistas” que perduran en el Reino Unido, Italia, España, así como en otros miembros de la UE (Habermas y Derrida, 2003).

Lo antes dicho es particularmente preocupante para América Latina y el Caribe, en tanto priva a esa región de potenciales aliados externos para emprender lo que Alfredo Guerra Borges denominó en 1996: “la regionalización de la globalización”; es decir, la profundización de los diversos proyectos de concertación política, cooperación e integración económica en curso entre los estados y gobiernos

²⁶ Los interesados en una discusión al respecto pueden consultar, entre otros, los trabajos de Luis Suárez Salazar y Atilio Borón referenciados en una nota anterior. Igualmente, las ponencias presentadas por los prestigiosos economistas Orlando Caputo y Alonso Aguilar en el 5to. Encuentro de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, efectuado en La Habana entre el 10 y el 14 de febrero del 2003.

situados a sur del Río Bravo y de la península de La Florida. Sin dudas, esa profundización en los contenidos y el funcionamiento de los organismos interestatales latinoamericanos y caribeños sería necesaria para enfrentar en mejores condiciones lo que John Saxe-Fernández (1996) ha denominado “la regionalización neomonroista del hemisferio occidental” impulsada por aquellos sectores de las clases dominantes y del *establishment* de la política exterior y de seguridad del norte, el centro y el sur del continente tradicionalmente interesados en lograr la subordinación de Canadá, de América Latina y el Caribe a las necesidades geoeconómicas y geopolíticas de los Estados Unidos.

No obstante, en la actualidad parece poco probable que pueda avanzarse en la profundización de los proyectos de concertación política, cooperación e integración latinoamericana y caribeña; ya que la mayor parte de los proyectos en curso (quizá con la excepción del MERCOSUR y de las resistencias que todavía subsisten en la Comunidad del Caribe, CARICOM) orientan sus esfuerzos hacia una integración subordinada hacia los Estados Unidos. Es decir, hacia el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio de América Norte, hacia la institucionalización de un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica, al igual entre los Estados Unidos, Chile y eventualmente otros países andinos, cual pudiera ser el caso de Colombia. La eventual concreción de esos acuerdos bilaterales o multilaterales de libre comercio objetivamente facilitarán el cumplimiento de los objetivos de aquellos sectores de los círculos de poder estadounidenses interesados en acelerar la “recolonización” del continente americano.

Cualquiera que sea la opinión que merezca esta última afirmación, lo cierto es que la retórica y la práctica de la estrategia de seguridad imperial de los Estados Unidos que hemos venido comentado tiende a fortalecer las intransigentes y poco reciprocas posiciones que han venido manteniendo los representantes de ese país en las negociaciones dirigidas a institucionalizar el ALCA; en tanto –como bien se ha indicado: “La liberalización propuesta por Washington es acompañada de [la demanda] de importantes garantías y excepciones que favorecen sectores poco competitivos de la economía estadounidense y preservan los instrumentos de defensa comercial a los que los Estados Unidos acostumbra recurrir”, bajo el argumento de que esos temas deben ser tratados, primero que todo, en el ámbito de la OMC. Entre ellos, la llamada legislación *antidumping* y la política de defensa de la agricultura (Nogueira Batista, 2003).

Sin embargo, los representantes estadounidenses pretenden que todos aquellos temas de su interés trasciendan los actuales acuerdos de la OMC (es decir llegar a los acuerdos llamados “OMC *plus*”). En particular, los acuerdos de esa organización que limitan aún más la soberanía y la jurisdicción de los estados miembros para lidiar con las poderosas empresas transnacionales y multinacionales que en la actualidad controlan los principales flujos inversionistas y financieros, más o menos especulativos, que están recibiendo algunas naciones del continente. Como bien ha demostrado la CEPAL (1998 y 2000), buena parte de esos flujos se dirigen hacia el control, la privatización y la desnacionalización de

importantes riquezas de la región, incluidas diversas propiedades del sector privado cada vez más asediadas por la estrategia de fusiones y adquisiciones que desarrollan las principales empresas transnacionales estadounidenses o europeas.

Lo anterior se une a las presiones que están realizando las principales potencias capitalistas del mundo (en primer lugar los Estados Unidos) con vistas a debilitar las instituciones surgidas después de culminada la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, a la propia Organización de Naciones Unidas; ya que *de facto*, de espaldas a esa organización, importantes gobiernos europeos (Reino Unido, España, Italia...) y asiáticos (entre ellos, Japón) han venido convalidando la espuria tesis de que los Estados Unidos (y sus aliados más o menos circunstanciales) tienen “el deber” y “el derecho” de intervenir militarmente “de manera preventiva” y de derrocar (*roll back*) a los gobiernos de aquellos países consideradas por la Casa Blanca como “estados fracasados” o “estados fuera de la ley” que constituyan “presuntas amenazas” para la seguridad nacional del territorio y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses o de sus cómplices, aliados y socios en cualquier parte del mundo.

Las amenazas que entrañan esos precedentes para las diversas naciones de América Latina y del Caribe son cada vez más evidentes. Sobre todo porque los actuales ocupantes de la Casa Blanca (tributarios intelectuales de los conocidos Informes de Santa Fe y de las elaboraciones teóricas de la otrora llamada “nueva derecha” de los Estados Unidos) siguen considerando a América Latina y el Caribe como “el escudo de la seguridad del nuevo mundo y [la] espada de la proyección del poder global de los Estados Unidos” (Comité de Santa Fe, 1981). Y porque —con independencia de cualquier juicio de valor acerca del gobierno talibán o hacia el presidente iraquí, Saddam Hussein— su derrocamiento mediante una brutal, ilegal e inhumana intervención militar extranjera pone nuevamente en el orden del día los criminales métodos empleados a lo largo de los siglos XIX y XX por los Estados Unidos y sus principales aliados europeos (Inglaterra y Holanda) para garantizar su control colonial, neocolonial, geopolítico y geoeconómico, según el caso, sobre las naciones de América Latina y el Caribe; y en particular sobre las naciones situadas al Norte del Río Amazonas (Suárez Salazar, 2003).

Aunque en esa subregión, sin dudas, los gobiernos de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela son los más amenazados por los enunciados y las prácticas asociadas a esa estrategia de seguridad imperial que venimos comentando, no se puede perder de vista la escalada de violencia que pudiera producir la ampliación de la intervención militar estadounidense en Colombia. Como se ha denunciado, además de echarle “más gasolina al fuego” del prolongado conflicto interno que afectada a ese país, lo anterior podría conducir a la virtual reocupación del Canal de Panamá por efectivos militares estadounidenses. Igualmente, podría significar un desafío para la seguridad de las otras naciones del hemisferio occidental (la mayor parte ubicadas en el Gran Caribe) que comparten fronteras terrestres o marítimas con Colombia (Leis, 2001). Por consiguiente, la tentación de emprender otra intervención militar “colectiva” en

América Latina y el Caribe podría incrementarse en las altas esferas oficiales de los Estados Unidos y de otros países de la región.

Pero aún el caso de que ese último escenario no llegara a configurarse, es de esperar que en el futuro previsible se fortalezca la llamada “propensión de la potencia hegemónica en el Hemisferio occidental a intervenir de diversas maneras en los asuntos internos y externos de sus vecinos del sur” (Van Kleveren, 1983). No sólo —como indiqué en un trabajo anterior (Suárez Salazar, 2002)— porque el llamado círculo vicioso Población-Pobreza-Medio Ambiente (PPA) amenaza con incrementar los conflictos sociales y políticos internos e internacionales en diferentes países de esa región, sino también porque la actual estrategia de seguridad imperial de los Estados Unidos nuevamente privilegia lo que Beatriz Stolowitz (1998) denominó la “gobernabilidad sistémica” (dirigida a preservar por diferentes medios, incluida la violencia, los sistemas de dominación existentes) de los países latinoamericanos y caribeños, así como —vinculado a lo anterior— la hegemonía política, económica, militar e ideológica-cultural de los Estados Unidos sobre las naciones del denominado Hemisferio Occidental.

Como bien se ha señalado, lo anterior seguramente impactará de modo negativo en las relaciones cívico-militares y en los procesos de “gobernabilidad democrática” de diversos países de esa región dado el peso que están adquiriendo en la teoría y la práctica político-militares canadiense, latinoamericanas y caribeñas las fortalecidas nociones acerca de los “nuevos enemigos de la seguridad interamericana” facturadas en los Estados Unidos (Bobeá, 2002). Por ende, es de esperar que —acorde con lo planteado por la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que hemos comentado y sin negar las contradicciones que subsisten entre esa potencia y otros gobiernos del continente— ese proceso tome un nuevo impulso al calor de la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica recientemente realizada en México. Igualmente, en las próximas Cumbres de las Américas pautadas (con carácter extraordinario) para enero del 2004 en México y (de manera ordinaria) para el año 2005 en Argentina. Según algunos pronósticos de dudoso cumplimiento,²⁷ esta última conferencia deberá ratificar el ALCA.

A pesar de las reticencias frente al ALCA que, por diversas razones, aún subsisten en algunos sectores de la sociedad y el sistema político canadiense y estadounidense, así como en algunos países de América del Sur (cual es el caso de Brasil y Venezuela) y de la Cuenca del Caribe, en el caso hipotético de que se cumpliera ese pronóstico se habrá dado un paso más en la bicentenaria pretensión estadounidense de establecer un Gran Sistema Americano funcional a su hegemonía y dominación sobre sus vecinos del Sur,²⁸ al igual que al despliegue

²⁷ En la actualidad el documento vinculado a las negociaciones del ALCA todavía tiene cerca de 7 mil corchetes; es decir igual número de asuntos en que las partes de la negociación aún no se han puesto de acuerdo. Ello hace suponer a algunos analistas (entre los que me incluyo) que será muy difícil concluir las negociaciones del ALCA (al menos en su formulación actual) antes del año 2005.

²⁸ Como se ha demostrado en la historiografía crítica acerca de las relaciones interamericanas la idea de formar este Gran Sistema Interamericano fue enunciada desde 1788 por uno de los Padres Fundadores de los

sus relaciones de cooperación, competencia y conflicto con las potencias integrantes de las llamadas “tríada” o “pentarquía” o sexágono del poder mundial.

Por consiguiente, si ese acuerdo llegará a firmarse se institucionalizará la subordinación de las naciones del hemisferio occidental a las necesidades geoeconómicas y geopolíticas (que siempre han andado juntas) de los Estados Unidos. Por ello, considero necesario reiterar el llamado del Apóstol de la independencia de Cuba y precursor de la segunda independencia de Nuestra América, José Martí (1889): “Los árboles se han de poner en fila para que no pase el Gigante de las Siete Leguas... Es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíz de los Andes”.

Ese llamado a la unidad lo más amplia y sólida posible entre todos los sectores sociales, políticos e intelectuales interesados en frenar la nueva ofensiva oligárquico-imperialista contra los pueblos de nuestra América es imprescindible en Colombia: país colocado –al igual que hace un siglo– en el vórtice de múltiples definiciones que (como ocurrió con la segregación de Panamá de noviembre de 1903) trascienden sus fronteras nacionales; en tanto su desenlace pudieran tener perdurables consecuencias negativas para el Gran Caribe, para el continente americano y para el resto del mundo. Sobre todo sí –atendiendo a los insistentes llamados del presidente Álvaro Uribe– la ONU, la Unión Europea o la OEA decidieran respaldar a pie juntilla la llamada política de “seguridad democrática” impulsada por el gobierno colombiano, con el ostensible respaldo de la Casa Blanca y del *establishment* de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, cuyos personeros más connotados visualizan a Colombia como un *test case* para la credibilidad de su flamante estrategia de seguridad imperial.

Como se ha denunciado por diferentes organizaciones políticas y sociales colombianas y de otras latitudes (incluidas diversas Organizaciones No Gubernamentales estadounidenses), en caso de que los organismos oficiales internacionales e interamericanas respalden las demandas intervencionistas de la actual administración colombiana y su pretensión de sindicar como “bandidos” a los “actores armados” de origen popular (el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se desconocerá la reconocida beligerancia que, a la luz del Derecho Internacional Público Contemporáneo, tienen esas organizaciones insurgentes. Por ende, se alejarán las posibilidades de encontrar soluciones políticas y negociados a la guerra civil que (con su larga secuela de violaciones a todos los derechos humanos y al derecho internacional humanitario) virtualmente ha venido afectando a esa nación desde el asesinato, el 9 de abril de 1948, de Jorge Eliécer Gaitán hasta la actualidad.

Estados Unidos de América, Alexander Hamilton . En ese año, Hamilton, siguiendo algunas ideas expresadas dos años antes por Thomas Jefferson, expresó: “Podemos esperar que dentro de poco tiempo nos convirtamos en los árbitros de Europa en América, pudiendo inclinar la balanza de las luchas europeas, en esta parte del mundo, de acuerdo con lo que dicten nuestros intereses (...) Dejád a los Trece Estados ligados por una firme e indisoluble unión, tomar parte en la creación de un Gran Sistema Americano, superior a todas las fuerzas e influencias trasatlánticas y capaz de dictar los términos de las relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo”.

Obviamente, la militarización e internacionalización del conflicto interno colombiano tendría un impacto negativo sobre Panamá, así como sobre otras naciones de la Cuenca del Caribe (cual es el caso de Cuba) y andino-amazónicas. En particular, sobre Ecuador y sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno constitucional insiste en desarrollar un programa de transformaciones internas superadoras de las nefastas consecuencias sociales y políticas de más de cuatro décadas de “cleptocracias representativas” surgidas al amparo de los oligárquicos y excluyentes Acuerdos de Puntos Fijos (1958), signados —con el respaldo de la administración de Dwight Eisenhower (20 de enero de 1957-20 de enero de 1961)— entre las cúpulas de los partidos Acción Democrática y COPEI (López Velaz, 2001). Igualmente, en emprender un curso de política exterior que le otorgue prioridades a la integración política y económica latinoamericana y caribeña (en primer lugar, suramericana) en lugar de a la regionalización neomonroista del hemisferio occidental, impulsada por los grupos de poder en los Estados Unidos.

De modo que puede afirmarse que —como ocurrió en las primeras décadas del siglo XIX— el espacio geográfico inicialmente ocupado por la Gran Colombia (Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá) nuevamente está colocado en la primera línea de defensa del proyecto del Libertador Simón Bolívar (1815) de fundar una Federación de Estados de la otrora llamada América Española que pudiera actuar de manera independiente frente a todas las potencias imperiales del Viejo y del Nuevo mundo; en primer lugar, ante el expansionismo estadounidense. Mucho más porque —como hemos visto a lo largo de este texto— en los primeros años del siglo XXI, sigue siendo verdad el anuncio bolivariano (1829): “... los Estados Unidos (...) parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias en nombre de la Libertad”.

BIBLIOGRAFÍA MENCIONADA

- Ayerbe, Luis Fernando (2001): *Los Estados Unidos y la América Latina*, Casa de las Américas, La Habana, 2001.
- Blanco, Juan Antonio (1986): “La administración Reagan: ¿tiempo de transición?”, en *Cuadernos de Nuestra América*, no. 6, La Habana, julio-diciembre de 1986, pp. 6-50.
- Bobea, Lilian (2002): “El Caribe: Las agendas de seguridad y defensa y el Impacto del 11 de Septiembre”, ponencia presentada al Seminario Internacional “La Seguridad en América Latina pos 11 de Septiembre”, Santiago de Chile, 14-15 de Octubre, 2002.
- Boff, Leonardo (2003): “El imperialismo de Bush”, en *América Latina en Movimiento*, No. 367, Quito, 8 de abril del 2003.
- Borón, Atilio (2002): *Imperio-Imperialismo: Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2002.
- Burch, Sally (2003). “Vaivenes de una guerra anunciada”, en *América Latina en Movimiento*, No. 367, Quito, 8 de abril del 2003.

Bush, George W. (2001): Discurso pronunciado ante ambas cámaras del congreso norteamericano el 20 de septiembre del 2001, traducción al español en Narciso Isa Conde, 2002.

Bush, George W. (2002): *La Estrategia de Seguridad Nacional*, en <http://usembassy.State.gov/colombia>, 8 de octubre del 2002.

CEPAL (1998): *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, 1998

----- (2000): *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, 2000.

Comité de Santa Fe (1980): "Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del Nuevo Mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos, mayo de 1980", en *Documentos*, no. 9, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1981.

Connell-Smith, Gordon (1976): *Los Estados Unidos y la América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

Dieterich, Heinz (2003): "Nuevo escenario golpista en Venezuela", en *Rebelión*, 27 de julio del 2003,

Galeano, Eduardo (1979): *Las venas abiertas de América Latina*, Siglo XXI Editores, México, 1979.

García Muñiz, Humberto y Jorge Rodríguez Beruff (1999): *Fronteras en conflicto: Guerra contra las drogas, militarización y democracia en el Caribe, Puerto Rico y Vieques*, Red Caribeña de Geopolítica, Seguridad Regional y Relaciones Internacionales afiliada al Proyecto ATLANTEA, San Juan, Puerto Rico, 1999.

González, Roberto (1988): *Política exterior de Estados Unidos: Doctrinas y dilemas*, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, La Habana, 1988,

Griffith, Ivelaw, et al (2003): *Caribbean Security in the age of Terror*, panel presentado en la XXVIII Conferencias Anual de la Asociación de Estudios del Caribe, Belice, 26 al 30 de mayo del 2003.

Grosfoguel, Ramón (2002): "Colonialidad global y terrorismo antiterrorista", en *Nueva Sociedad*, No. 177, Caracas, Venezuela, enero-febrero del 2002, pp. 133-137.

Guerra Borges, Alfredo (1996): *La integración centroamericana ante el reto de la globalización (antología)*, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) de Centroamérica y el Caribe, Managua, Nicaragua, 1996.

Habermas, Jürgen y Jacques Derrida (2003): "Europa: en defensa de una política exterior común", en *El País*, España, 04-06-2003

Isa Conde, Narciso (2002): *Los Halcones atacan. Estrategia E.U. en el siglo XXI y alternativa revolucionaria*, Editora Tropical, República Dominicana, 2002, pp. 74-85.

----- (2003): "Contexto y pretextos de la Estrategia de dominación y seguridad de los Estados Unidos", ponencia presentada a la Conferencia Internacional "Martí y el Equilibrio del Mundo", La Habana, Cuba, 27 al 29 de enero del 2003.

Klepak, Hal (2003): "The road gets harder: A Historical perspective of canadian strategies choices in the post-september 11th environment", Ponencia presentada a la Conferencia Internacional "Martí y el equilibrio del mundo", efectuada en La Habana, Cuba, entre el 27 y el 29 de enero del 2003.

- Leis, Raúl (2001): "Panamá: frontera ardiente", en *América Latina en movimiento*, Nro. 331, Quito, 24 de abril del 2001.
- Lenin, Vladimir I. (1917): "El imperialismo, fase superior del capitalismo", en *LENIN: Obras Escogidas en Doce Tomos*, Editorial Progreso, Moscú, 1976, Tomo V, pp. 372-500.
- Lieber, Robert J. (2002): "Comienza nueva era en el pensamiento estratégico de Estados Unidos", en *Septiembre 11: Un año después*, material mimeografiado distribuido por la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, Cuba.
- López Vélaz, Elio Fidel (2001): "La revolución bolivariana: De los actores hegemónicos a las bases del cambio", en *Cuadernos de Nuestra América*, no. 28, La Habana, julio-diciembre del 2001, pp. 70-83
- Marcella, Gabriel y Schulz, Donald (1999): "Las tres guerras de Colombia", en *Análisis Político*, no. 37, Universidad Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá, mayo-agosto de 1999.
- Nogueira Batista, Paulo (2003): "El ALCA y Brasil", en *América Latina en Movimiento*, no. 369, 20 de mayo del 2003.
- Noriega, Roger (2003): "EE.UU. urge intensificar cooperación en seguridad hemisférica", en Departamento de Estado de Estados Unidos: *Servicio Noticioso desde Washington*, <http://usinfo.state.gov/español>, 2 de Julio de 2003
- OEA (2002): Declaraciones y Resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones (Versión provisional sujeta a revisión por la Comisión de Estilo), OEA/AG/doc. 4143/02, Bridgetown, Barbados, 4 junio 2002.
- OFDPD (2001): *Tendencias mundiales de las drogas ilícitas*, Nueva York, 2001.
- Pérez Roque, Felipe (2003), *Conferencia de prensa ofrecida el 9 de abril del 2003*, Editora Política, La Habana, 2003.
- Petras, James (2003): "Imperialismo, Militarismo y las Contradicciones del Imperio", ponencia a la Conferencia Internacional "Martí y el equilibrio del mundo", efectuada en La Habana, Cuba, entre el 27 y el 29 de enero del 2003.
- Robinson, William (1996): "El rol de la democracia en la política exterior norteamericana y el caso Cuba", en Haroldo Dilla (compilador): *La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos*, Centro de Estudios sobre América-Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996.
- Saxe-Fernández, John (1996): "Mexamérica o la dialéctica entre la macro y la micro-regionalización", en *Nueva Sociedad*, Caracas, mayo-junio 1996, No. 143.
- Schlesinger Jr, Arthur (2003): "Restauración de la presidencia imperial", en *Entorno*, Boletín Especial de CUBARTE, Año 1, Número 5, La Habana, 28 de julio del 2003.
- Selser, Gregorio (1992): *Enciclopedia de las intervenciones extranjeras en América Latina*, Monimbó e.V, RFA, 1992, p.33.
- Simón Bolívar (1815): "Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla", Kingston, 6 de septiembre de 1815, en *Simón Bolívar: Obras completas*, volumen I, Editorial LEX, La Habana, 1947, pp. 159-174.
- _____(1829): "Carta al coronel Patricio Campbell, Encargado de Negocios de S.M.B., Guayaquil, 5 de agosto de 1829", en *Simón Bolívar: Obras completas*, vol. I, ed. cit., p. 736.

Stolowicz, Beatriz (1998): "La gobernabilidad como dominación conservadora", en Hernán Yanes Quintero (compilador): *El mito de la gobernabilidad*, Editorial Trama, Quito, Ecuador, 1998.

Suárez Salazar, Luis (1995): "Nuevo 'orden' mundial, integración y derechos humanos en el Caribe: apuntes para una reconceptualización", en *Globalización, Integración y Derechos Humanos en el Caribe*, ILSA, Santafé de Bogotá, 1995.

_____ (1986): "La política de la Revolución Cubana hacia América Latina y el Caribe: notas para una periodización", en *Cuadernos de Nuestra América*, La Habana, julio-diciembre de 1986.

_____ (1998). "La globalización: ¿fase superior y última del imperialismo?", Asociación para la Unidad de Nuestra América, La Habana, 1998

----- (2000): *El siglo XXI: Posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2000.

----- (2001): *América Latina y el Caribe: Medio siglo de crimen e impunidad (1948-1998)*, coeditado por las editoriales ZAMBON IBEROAMERICANA y "José Martí", Frankfurt y La Habana, 2001.

----- (2002): "Gobernabilidad democrática y nuevo orden panamericano: Apuntes para un debate", en Haroldo Dilla (compilador) *Los recursos de la gobernabilidad en la Cuenca del Caribe*, Nueva Sociedad, Caracas, 2002.

----- (2003): *Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003.

Toklatian, Juan G. (1983): "¿Es nueva la 'nueva' política exterior latinoamericana?", en Gérard Drekonja y Juan G. Toklatian (compiladores): *Teoría y práctica de la política exterior latinoamericana*, FESCOL Y Universidad de los Andes, Bogotá, 1983.

Trofimentko, G. (1987): *La doctrina militar de EE.UU.*, editorial Progreso, Moscú, 1987.

Van Kleveren, Alberto (1983): "El lugar de los Estados Unidos en la política exterior latinoamericana", en *Teoría y práctica de la política exterior latinoamericana*, Universidad de los Andes, Bogotá, 1983.

Vargas Meza, Ricardo (2001): "Drogas, seguridad y democracia", en *Nueva Sociedad*, no. 173, Caracas, mayo-junio del 2001, pp. 104-125.

Wright, George (2003): "Wolfowitz: Iraq war was about oil", *The Guardian*, London, June 4 del 2003.

Younger, Colleta (1997): "La única guerra que hemos conseguido: imposición de drogas en América Latina" en *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe*, no. 1, FLACSO-Nueva Sociedad, Caracas, 1997.